



PRECEDENTES ANALIZADOS — JURISPRUDENCIA 2026

Instrucción General ARCA y el fallo CSJN “Ilic c/ CNV”

1. IG-2026-4-E-ARCA-SDGASJ (15/05/2026) — Impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios: precedente “García, María Isabel” (Fallos: 342:411).
2. CSJN, “Ilic, Suzan Hayley y otros c/ CNV”, CCF 21364/2022/1/RH2 (14/05/2026) — límites y cómputo del plazo razonable en el procedimiento administrativo.



ANTECEDENTE I

Instrucción General ARCA

IG-2026-4-E-ARCA-SDGASJ · CABA, 15 de mayo de 2026

Impuesto a las Ganancias sobre haberes jubilatorios — estrategia procesal del Fisco tras la
inconstitucionalidad declarada en “García”.

Precedente “García” de la CSJN



Protección por vulnerabilidad

La CSJN declaró inconstitucionales los arts. 23 inc. c), 79 inc. c), 81 y 90 de la ley 20.628 (texto s/ leyes 27.346 y 27.430) en cuanto gravaban los haberes jubilatorios de la actora.

Ponderó que el **envejecimiento y la enfermedad** son causas determinantes de vulnerabilidad que exigen mayores gastos: la actora tenía 79 años y problemas de salud acreditados.



Mandato al Congreso y al Fisco

Ordenó reintegrar los montos retenidos desde la interposición de la demanda hasta su efectivo pago.

Dispuso que, hasta tanto el Congreso legisle un tratamiento diferenciado para jubilados vulnerables por ancianidad o enfermedad —conjugado con la capacidad contributiva potencial—, **no podrá descontarse suma alguna** por Ganancias de la prestación previsional.

Consolidación colectiva y límites



Efecto colectivo

La Corte extendió de manera uniforme esta doctrina protectora a causas colectivas como “*Godoy*” y “*Piccoli*”, y luego en “*Luna*”, “*Castro*” y “*Cantu*” confirmó sentencias contrarias al Fisco denegando sus recursos por el art. 280 CPCCN.



El caso “Alazraki”

En 2021 se validó la protección aun para un actor de **53 años** por razones de salud comprobadas: la vulnerabilidad prima sobre la edad cronológica.



Insuficiencia de la ley 27.617

Determinó que las reformas de la ley 27.617 **no resolvieron** el fallo “*García*”: se fundaron en criterios patrimoniales, sin un trato diferenciado real para jubilados vulnerables.

Nueva estrategia procesal de ARCA



Abstención recursiva federal: Los Representantes Fiscales no deberán interponer recursos extraordinarios contra los decisorios que apliquen la doctrina “García”, ni recursos de queja ante la denegatoria de los remedios federales ya presentados.



Desistimiento obligatorio: En los juicios con remedio federal ya interpuesto y aún no sustanciado, los Representantes Fiscales deberán proceder a su desistimiento.



Consentimiento en Cámara: Ante el rechazo sistemático de las apelaciones por la Cámara Federal respectiva, se consentirán las sentencias de primera instancia respecto de la cuestión de fondo.



Recursos por costas y honorarios: El desistimiento es solo sobre el fondo: se proseguirá la vía recursiva en materia de honorarios y costas impuestas al organismo, para no generar mayores erogaciones al erario.

Matriz de acciones procesales

ESCENARIO DEL JUICIO	INSTRUCCIÓN PROCESAL OBLIGATORIA	EXCEPCIONES ADMITIDAS
Recurso federal no sustanciado	Desistimiento inmediato del remedio federal.	Inexistencia de legitimación activa de la actora (vgr. asociaciones, colegios).
Sentencia adversa de 1° instancia	Consentir el fondo si existe jurisprudencia pacífica en la alzada.	Viabilidad fáctica comprobada para revertir, con conformidad de la Jefatura inmediata.
Costas y honorarios del juicio	Proseguir la vía recursiva para defender los fondos del erario.	Ninguna: es obligatorio apelar los desvíos económicos.
Trámite interno (Disp. 81/22 AFIP)	No se requiere la autorización previa de la Disposición N° 81/22 (AFIP).	La aplicación de la Instrucción General es de oficio.



ANTECEDENTE II

Límites al plazo razonable

CSJN, “Ilic, Suzan Hayley y otros c/ Comisión Nacional de Valores”
CCF 21364/2022/1/RH2 · 14/05/2026 · Recurso de Queja N° 1 — la Corte remite al dictamen de la
Procuradora Fiscal y deja sin efecto la sentencia apelada.

El caso de fondo y la sentencia de Cámara

- **25/03/2015** Inspección de la CNV en la sede social de Caterpillar
- **24/05/2017** Resolución 18.722: apertura del sumario
- **06/12/2021** Dictamen final de cierre
- **10/08/2022** Resolución 210/2022: multa (art. 132 inc. b, ley 26.831)
- **14/05/2026** La CSJN deja sin efecto la sentencia de Cámara

Anulación por “dilación excesiva”

La Sala I de la Cámara Civil y Comercial Federal revocó la multa impuesta por la CNV a *Caterpillar Financial Services* y, en forma solidaria, a sus directores y síndicos, argumentando que transcurrieron **más de 7 años** entre la inspección original (2015) y la resolución sancionatoria final (2022).

La Cámara sostuvo que los lapsos de inactividad —atribuibles a la CNV en un sumario sin especial complejidad— vulneraron la garantía del debido proceso y el plazo razonable de los sumariados (arts. 18 CN y 8.1 CADH).

Cómputo correcto de la dilación



5a 3m

TIEMPO NETO DEL SUMARIO

(menor a la prescripción de 6 años)

Exclusión de la inspección previa

La CSJN y la Procuración corrigieron el cómputo del plazo: **la etapa de inspección previa no se computa** para el plazo razonable, ya que se desarrolla *inaudita parte* y no impone cargas gravosas ni incide sobre la situación jurídica de los sumariados.

El plazo se calcula estrictamente desde el auto de apertura (mayo 2017) al acto sancionatorio (agosto 2022): un lapso de **5 años y 3 meses no vulnera de por sí** las garantías constitucionales, máxime cuando los actores ejercieron plenamente su derecho de defensa.

Doctrina CSJN y fallo “Losicer”



Respeto del plazo de prescripción: El plazo transcurrido fue inferior al término legal de prescripción de 6 años fijado por el art. 135 de la ley 26.831 — a diferencia de los precedentes invocados por la alzada, que lo superaban ampliamente.



Análisis integral y no matemático: La razonabilidad exige ponderar la complejidad del asunto, la conducta de las partes y de la autoridad, y la afectación concreta: pautas que la Cámara omitió analizar, incurriendo en arbitrariedad.



Límite a la discrecionalidad judicial: Los jueces no pueden fijar el plazo razonable con apreciaciones subjetivas o dogmáticas: deben profundizar sus argumentos para que la valoración pueda examinarse críticamente (doctrina “Kipperband”).

EL CONTRASTE CON “LOSICER”

18 años

desde los hechos infraccionales hasta la resolución del sumario del BCRA

15 años

desde su apertura: allí sí se afectó el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Comparativa de duración de procesos

Caso “Losicer” (exceso irrazonable)

15 años — nulidad

Caso “Ilic” (plazo convalidado)

5,25 años — válido

Límite legal de prescripción

6 años — ley 26.831, art. 135

El precedente “Losicer” implicó un sumario que duró más del doble del término de prescripción de la acción. En cambio, el proceso de “Ilic” concluyó dentro del marco del plazo legal, lo que convalida su plena constitucionalidad.

5) Infracciones al régimen financiero y aduanero

En esta materia la Corte en **Fallos: 336:2184** revocó la sentencia que había confirmado las sanciones aplicadas por presuntas **infracciones al régimen financiero. Para así decidir expresó que la garantía de la defensa en juicio de los recurrentes y su derecho a obtener una decisión en el plazo razonable** al que alude el art. 8, inc. 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos había sido vulnerada **teniendo en cuenta el análisis global del procedimiento**, que comprende tanto el sumario llevado a cabo en la órbita del Banco Central, como la instancia judicial de revisión cumplida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y **que se había prolongado hasta casi veintiséis años después de ocurridos los hechos investigados, extensión que resultaba injustificada, máxime al no**

advertirse que se trataba de un asunto de especial complejidad o que haya sido la actuación procesal de los sancionados la que hubiera interferido en el normal desarrollo de los procedimientos.

También la Corte revocó la sentencia que confirmaba las multas impuestas por B.C.R.A por aplicación de lo establecido por el inc. 3º, del art. 41 de la ley 21.526 ante diversas infracciones al régimen financiero pues consideró allí que **los prolongados lapsos de inactividad procesal, puestos de manifiesto por la propia autoridad administrativa, atribuibles inequívocamente a dicha entidad financiera, se presentaban como el principal motivo de la dilación del sumario que tuvo resolución solo después de haber transcurrido dieciocho años desde el acaecimiento de los hechos supuestamente infraccionales y tras quince años de haberse dispuesto su apertura.** Agregó que la **irrazonable dilación del procedimiento administrativo resultaba incompatible con el derecho al debido proceso** amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (**Fallos: 335:1126**).

Asimismo en **Fallos: 334:1264** expresó que el procedimiento recursivo originado en la denuncia por la **comisión de infracciones en dos despachos aduaneros que se prolongó durante más de veintitrés años excedía todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso penal** por lo que, si se ordenara un reenvío a los efectos de la tramitación de un incidente de prescripción de la acción en la instancia pertinente ello no haría más que continuar dilatando el estado de indefinición en que se había mantenido al actor, en violación de su derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (art. 18 de la Constitución Nacional y 8º, inc. 1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), razón por la cual correspondía que sea la Corte la que ponga fin a la causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción.



Preguntas o comentarios

Análisis comparativo de la defensa fiscal del Estado
y garantías de plazo razonable administrativo.

ESTRATEGIAS JURÍDICAS DEL ESTADO · JURISPRUDENCIA 2026